

Gran Parte de la Sociedad la Rechazaría

No es Militar la Solución

- ★ El Ejército Tiene que Eludir la Presión y Tentaciones
- ★ No hay Gloria en Acabar a los Pobres de los Pobres
- ★ Nadie Quiere Unas Fuerzas Armadas Resentidas

LORENZO MEYER

Una "solución" militar al problema de la insurgencia chiapaneca, como la que se dio en Guerrero hace veinte años, hoy no sería realmente solución: una parte importante de la sociedad mexicana la rechazaría. Los mandos del ejército no deben permitir que la presión —¿o la tentación?— les lleve por ese camino. Por su parte, el comisionado para la Paz debe evitar la impaciencia; debe alejarse de callejones como el que visitó el 29 de enero, cuando dijo al Ejército Zapatista

SIGUE EN LA PAGINA DIEZ

No es Militar la Solución

Sigue de la primera plana

de Liberación Nacional (EZLN): "Pactar la paz con democracia o endurecimiento." Si en México el régimen, después de más de medio siglo en el poder, aún no logra encontrarse con la democracia, ¿cómo puede, legítimamente, exigir a sus adversarios: paz con democracia o endurecimiento?

La violencia, como posibilidad, es parte integral y permanente de todo orden político. Sin embargo, una medida del éxito de ese orden, es precisamente el no tener que recurrir a ella para sostener su estructura de autoridad. Cuando las armas toman el centro del escenario en la vida pública, es porque alguien ha fracasado en su tarea política.

En los días que corren, hay en los altos mandos del ejército mexicano una mezcla de irritación y sorpresa al

descubrir que tras concentrar 18,500 efectivos en Chiapas y librar con éxito combates contra el Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) —especialmente en los alrededores de San Cristóbal, Ocosingo y en Rancho Nuevo—, el EZLN mantiene la iniciativa política y ha logrado despertar una gran corriente de simpatía en México y en el exterior.

Es importante tratar de entender las razones del ejército en este momento, pues en poco ayudaría a la buena marcha de los asuntos públicos tener unas fuerzas armadas hoy irritadas y mañana resentidas. Sin embargo, es igualmente vital que el ejército entienda las razones del EZLN, su impacto en sectores importantes de la opinión pública, y los motivos de quienes exigen que en la conducción de las operaciones militares se rom-

pa definitivamente con una vieja tradición, y se respeten cabalmente los derechos humanos.

Para los mandos del ejército, ha resultado irritante que, con motivo del 25 aniversario del movimiento estudiantil del 68: a) se haya vuelto a abrir el debate sobre el papel del ejército en la supresión de ese movimiento ("Comisión de la Verdad"), b) se ventile en la prensa el proceso del ejército contra el general brigadier José Francisco Gallardo, y c) que tras las acciones militares en Chiapas, haya surgido un diluvio de acusaciones contra el ejército por violación de los derechos humanos de civiles e insurgentes. En realidad, las tres situaciones son resultado de un mismo factor: el cambio en la actitud de la sociedad civil mexicana y en el ambiente internacional. Se trata

SIGUE EN LA PAGINA DOCE

de un cambio importante —mientras el Estado se contrae, la sociedad civil se expande—, difícilmente reversible, y que hace más activa a la sociedad en la modelación de su propio destino.

El Ejército mexicano, escribió hace diez años David Ronfeldt, un politólogo norteamericano, "se mantiene como uno de los grandes misterios del México moderno". Se trata de un ejército sui generis en el contexto de América Latina, y que había logrado mantenerse lejos del examen público. El especialista pronosticó que, en la medida en que surgirán situaciones que la élite civil no pudiera manejar por sí misma —el movimiento estudiantil, las guerrillas de Guerrero y la urbana, la lucha contra el narcotráfico— ese ejército tendería a convertirse en un socio relativamente más importante de quienes gobiernan a México (*The Modern Mexican Military: A Reassessment*, Center for U. S.-Mexican Studies, 1984, Pág. 1). Pues bien, la predicción de Ronfeldt se ha vuelto a cumplir, y ello entraña riesgos, tanto para el sistema político como para el propio ejército.

Poner al ejército en el papel de pacificador de Chiapas si las negociaciones de paz no se desarrollan como el gobierno desea, sería un error grave, para empezar porque en estricto sentido, los problemas de Chiapas no son ni han sido militares. Hoy, como hace veinticinco años en Tlatelolco o

veinte en Guerrero, la dirigencia civil ha vuelto a llamar al ejército para hacer frente en Los Altos de Chiapas y en la selva Lacandona a un desafío mayúsculo, que básicamente es una reacción a errores e irresponsabilidades del liderazgo civil (aunque, claro, el gobernador Absalón Castellanos era militar).

Las políticas que durante el último par de sexenios combinaron en Chiapas mano dura con pobreza, concentración de riqueza, daño ecológico, caciquismo, disputas por la tierra, desplome del precio del café, violación de los derechos humanos y cerrazón frente a la acción política pacífica, fueron hechura del poder civil. En palabras del propio subcomandante Marcos, del EZLN, la represión contra las comunidades indígenas no la hizo básicamente el ejército sino las policías y las "guardias blancas"; claro que no faltan, en la historia reciente de Chiapas, ejemplos de acción militar contra las comunidades (consultese al respecto, la parte final del libro de Thomas Benjamin, *A Rich Land, a Poor People*, 1989).

En De la guerra, Karl Von Clausewitz afirma que toda guerra "surge de las relaciones políticas de los gobiernos y de los pueblos". La rebelión chiapaneca de hoy surge de una política particularmente autoritaria y excluyente de los gobiernos posrevolucionarios en la "Centroamérica mexicana". Si la política es el origen del mal, entonces el remedio tiene que ser de la misma naturaleza, no militar.

Todo indica que el ejército advirtió de tiempo atrás a las autoridades civiles que una rebelión se preparaba en Chiapas (incidente de Corralchén, mayo de 1993). Cuando el conflicto finalmente estalló, las tropas del general Miguel Ángel Godínez se defendieron bien en Rancho Nuevo y retomaron rápidamente las poblaciones que ocupó el EZLN. Sin embargo, de aquí en adelante los altos mandos militares deberían evitar a toda costa que la clase política intente que sea el ejército el que le saque el resto de las castañas del fuego. A estas alturas, la lección de Tlatelolco debiera ser muy clara: la solución militar a demandas políticas consideradas justas, no es, en realidad, una solución. Y el costo de esa falsa solución son heridas profundas a la rela-

La guerra. El libro el ejército en Guerrero durante el gobierno de Luis Echeverría, terminó con un triunfo del aparato militar. Sin embargo, la memoria de esa brutal campaña no se ha perdido, y se encuentra recogida, entre otros lugares, en el espléndido y terrible libro de Carlos Montemayor: *Guerra en el Paraíso*. La campaña de Guerrero no es para enorgullecer a ninguno de los vencedores: ni a los militares ni a sus jefes políticos. Fue una guerra despiadada, donde se violaron sistemáticamente los derechos humanos de poblaciones enteras. Fue una guerra a la antigua, donde se tomaron pocos prisioneros y se dañó en exceso a los perdedores históricos. A veinte años de ese triunfo militar, Guerrero no es un sitio mejor de lo que era. No hay gloria en destruir a los pobres de entre los pobres en defensa de lo indefendible.

ción sociedad-ejército, heridas de lenta cicatrización.

Chiapas es hoy un teatro de guerra y maniobras políticas, vigilado por la prensa y las sociedades nacional e internacional como nunca antes en México. Las organizaciones no gubernamentales (ONG) de derechos humanos son

un fenómeno relativamente nuevo entre nosotros. Guste o no, el caso es que las ONGs —nacionales y extranjeras— llegaron para quedarse entre nosotros; hoy son muchas, mañana serán más. El ejército debe aprender a vivir entre ellas, pues no tiene opción. En esta época de TLC y de economía abierta a los cuatro puntos cardinales, es inútil tratar de usar el viejo principio de "no intervención" para proteger las zonas oscuras de las miradas externas. La comunidad internacional poscomunista ya no acepta que la violación a los derechos humanos sea un asunto meramente interno.

Para que el ejército salga bien librado de su estancia masiva en la selva y Los Altos de Chiapas —su imagen y prestigio— no basta con mantener el cese al fuego ni dejar que los políticos resuelvan un problema que es suyo. La breve pero letal acción del ejército en Chiapas, ha dejado abiertas varias interrogantes que deben responderse a satisfacción de la sociedad. Sedena insiste en que no usó la artillería ni la aviación contra poblados: sólo usó rockets y ametralladoras en so-

nas boscosas (el camarógrafo que acompañaba al reportero de televisión, Bruno López, grabó el fuego aéreo de que fue objeto a pesar de llevar una bandera blanca bien visible). Bien, pero hay otros puntos que piden aclaración. ¿Quién fue responsable de la muerte de los cinco presuntos zapatistas en el mercado de Ocosingo tras la recuperación de la plaza por el ejército, y que la prensa y la televisión mostraron al mundo entero?; sus cadáveres estaban en fila, boca abajo, con claras huellas de haber sido atados —las cuerdas penetraron la carne de sus muñecas— y luego muertos con un tiro en la cabeza. Sólo la presión de las organizaciones de derechos humanos —en este caso,

Physicians for Human Rights— hizo que se reabriera el caso, pues la Procuraduría General de la República lo había cerrado sin esclarecerlo. ¿Cómo murieron los 14 ocupantes del microbús en el camino San Cristóbal-Ocosingo? ¿Y los desaparecidos?, por ejemplo, los hermanos Severiano y Hermelindo Santiz Gómez y Santiago Santiz López, que fueron hechos prisioneros por el ejército en el poblado de Morelia, y cuyos habitantes declaran que fueron torturados en la iglesia local, metidos en una ambulancia militar y desde entonces no se les ha vuelto a ver. Otro ejemplo es el de los jóvenes Jorge Mariano Solís y Eduardo Gómez, arrestados por la policía en Las Margaritas el 16 de enero, entregados al

ejército y ocho días más tarde encontrados muertos cerca de la comunidad de Agua Prieta. Están, finalmente, los relatos de personas como Manuel López Méndez, recién liberado de la prisión de Cerro Hueco, y que afirma que tras ser arrestado, fue detenido y golpeado por tres días en el cuartel de Comitán.

El expediente, pues, está abierto y en manos de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) y del procurador general de Justicia Militar. El ejército debe cerrarlo de manera expedita y creíble. Esa es su responsabilidad, pero también su oportunidad de dejar en claro que ya no se necesitará una futura "Comisión de la Verdad" para Chiapas, al menos no para el ejército.